

La reedición del sesgo anticampesino en los diálogos de La Habana.

Por: Andrés Aponte*

A finales del 2012, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió a la sociedad colombiana y a los medios de comunicación cuando hizo pública su intención de entablar diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Habana, Cuba. Este nuevo esfuerzo, tras los intentos malogrados de décadas pasadas (La Uribe y El Caguán), generó cierto entusiasmo dentro de la opinión pública después de más de ocho años de intensa confrontación entre el Estado y las FARC; sin embargo, también se alzaron voces de protesta y animadversión de otros sectores (Partido Conservador, Federación Nacional de Ganaderos- Fedegan- y el ex presidente Uribe Vélez) frente a los temas gruesos a tratar (desarrollo rural y participación política). Porque a su consideración un diálogo con este grupo no sólo se constituye en una traición al legado político de Uribe¹, sino también como una muestra de debilidad de la actual administración. En esta dirección, la tesis sostenida por los sectores reaccionarios es que no se puede establecer algún tipo de negociación con el “terrorismo”, refrendando un discurso que niega la inexistencia de un conflicto armado en Colombia; y el cual, a su vez, encierra el histórico sesgo anticampesino en el modelo de desarrollo rural en el campo colombiano (Uribe, 2011 y 2009).

Raíces históricas del sesgo anticampesino

No sobra recordar que desde los años treinta del siglo pasado, el Estado colombiano ha tratado de impulsar una serie de reformas distributivas en el espacio rural, sin embargo éstas han sido obstaculizadas por la capacidad de veto de la élite rural colombiana. Este veto se visibiliza en una postura selectiva frente a las políticas del gobierno central de acuerdo a la sincronía que tengan en relación a sus intereses; y se hace efectivo a través del control e influencia sobre las autoridades, mandatarios y por consiguiente la institucionalidad local. Asimismo, también han apelado a las vías de hecho: desalojo



Las reformas de distribución de la tierra son obstaculizadas por el poder de la élites privilegiando la tenencia de fundos.

masivo del campesino de los fundos y el uso de la violencia para proteger sus predios.

El veto impuesto por las élites rurales evidencia una reacción que ha sido su postura, porque los esfuerzos reformistas no se han centrado en una redistribución de la tierra en las zonas integradas a la vida nacional, sino en la formalización de la tenencia de la tierra en zonas de frontera agrícola y en los bolsones interiores (Sumapaz, Tolima, etc.), en forzar a los terratenientes a hacer más productiva la tierra, para sanear y actualizar los registros catastrales que “representarían” nuevos ingresos fiscales para el Estado pero que tuvieron muy mala recepción dentro de la élite rural. Además, cuando se dieron intentos redistributivos por parte del poder central (Ley 135 de 1961 y Ley 1 de 1968), estos procedieron al desalojo masivo del campesinado y al uso de la coerción para defender sus predios, teniendo como respuesta un freno al reformismo o el inicio de un proceso de contrarreforma, en los que no sólo se le dio prioridad a la agricultura comercial (Ley 4 y 5 de 1973) sobre la campesina, sino que también se llegó al punto de reforzar las relaciones tradicionales de sujeción a la tierra (Ley 100 de 1944 y Ley de aparcería) por la negativa de las élites rurales a hacer parte del contrato fiscal.

“

Cuando se dieron intentos redistributivos por parte del poder central (Ley 135 de 1961 y Ley 1 de 1968), estos (las élites rurales) procedieron al desalojo masivo del campesinado y al uso de la coerción para defender sus predios

”

Los fracasos de los distintos intentos reformistas significaron a su vez sendas derrotas para el campesinado, que terminaron por configurar durante el período del Frente Nacional, lo que hemos denominado el sesgo anticampesino² en

el modelo de desarrollo rural colombiano, a pesar de que el Frente Nacional inaugura un período reformista. Este sesgo se caracteriza por la negativa de las élites rurales a emprender una reforma agraria, y por una prevalencia de la agricultura comercial en el modelo de desarrollo, lo que restringió, a su vez, la financiación y asistencia técnica a este tipo de explotación, dejando al margen de la vida económica nacional al campesinado y reforzando este sesgo (Uribe, 2011 y 2009). Situación que se visibiliza con el pacto de Chicoral, y que se refrenda con el Plan de Desarrollo Rural Integral (DRI). Debido a que las élites rurales y algunos políticos regionales que señalaban al gobierno de Lleras Restrepo de envalentonar al campesinado y de estar llevando a cabo una reforma comunista (Pécaut, 1987). Y es que para inicios de la década del 70 hubo una inusitada ola de invasiones (Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, Sucre, Huila) a causa del poco avance de la reforma, el poder de veto de las élites rurales a ésta y el desalojo masivo del campesinado. Por lo cual, para ese entonces el campo colombiano estaba inmerso en un contexto de polarización y violencia.

Para los años ochenta, la emergencia de un nuevo actor (narcotraficantes) en el campo colombiano significó no sólo una acentuación de la agricultura comercial y la ganadería sobre la campesina, sino también el inicio de un nuevo proceso de contrarreforma agraria (Reyes, 2007)³. Igualmente, todo intento redistributivo quedó truncado por la competencia política a nivel local que inauguró la descentralización política y administrativa, que, en algunas ocasiones, contó con la violencia de los grupos armados contra autoridades y funcionarios locales, permitiéndole infiltrar la institucionalidad y apuntalar, lo que se

“

Los fracasos de los distintos intentos reformistas significaron a su vez sendas derrotas para el campesinado, que terminaron por configurar durante el período del Frente Nacional, lo que hemos denominado el sesgo anticampesino

”



En las últimas décadas las políticas del gobierno central han beneficiado la ganadería y la agricultura comercial.

denomina consocialismos antsubversivos regionales, de los cuales las élites rurales sacaron provecho para eludir la tributación y financiación de bienes públicos (Gutiérrez, 2007 y Uribe, 2009).

Para la década siguiente, la apertura económica ensombreció aún más el panorama rural, al sumirlo en una grave crisis; sumado al recrudecimiento del conflicto armado colombiano que derivó en desplazamientos masivos y acciones de despojos en distintas zonas del país (Urabá, Magdalena Medio, Catatumbo, Meta, Valle del Cauca), a cuenta de la expansión nacional del paramilitarismo. Adicionalmente, persistió un “continuismo” en el modelo de desarrollo inclinado por la explotación comercial y su consolidación en nuevas zonas del territorio colombiano, que se hizo patente en el gobierno de Uribe Vélez, de la mano de su ministro de Agricultura y su programa Agro Ingreso Seguro (AIS), así como la controvertida apreciación sobre Carimagua.

La reedición del sesgo anticampesino

Realizado este sucinto recuento histórico, vale la pena preguntarse: ¿Cómo se reedita el sesgo “anticampesino” de parte de los detractores del actual proceso de paz? ¿Qué tipos de continuidades y rupturas se hacen presentes? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuál es su idea de desarrollo?

Anunciado el inicio de las conversaciones, varios sectores de la sociedad colombiana se mostraron en desacuerdo con la política de paz del gobierno Santos. Entre los que sobresalen el gremio ganadero (Fedegan) y el uribismo, representados por José Félix Lafaurie y el ex mandatario respectivamente. Para Lafaurie, los ganaderos no tienen intención alguna de hacer parte de la mesa porque las FARC han engañado por treinta años

a la sociedad y a los gobiernos de turno, y la actual política de paz ha ido en desmedro de la Seguridad Democrática (El Mundo, 25 de enero 2013 y Entrevista Duzán en Revista Semana, 2012). Y agrega que “la negociación (...) es solo una vitrina para quienes han despojado, secuestrado y asesinado a los campe-

sinos(...) (y) no cree que se dé el tema de la desmovilización ni la restitución de tierras por parte de las FARC” (El Mundo, 25 de enero de 2013 y Contexto Ganadero, 18 de enero de 2013). Adicionalmente, con-

sidera que el tema agrario no debe ser tratado con este grupo, porque las FARC “han sido los verdugos de los ganaderos y de todos los actores productivos del sector rural”; y su exigencia se centra en “más elementos de política pública en el campo, sin que nos cataloguen como enemigos del desarrollo, simplemente porque nos oponemos a una negocia-

ción con las FARC. El Gobierno había dicho que no se iba a negociar el modelo de desarrollo económico ni la propiedad privada” (El País, 26 marzo 2013).

Otro elemento que compone su negativa a la discusión del tema agrario es el de comolas FARChañ hecho del tema de la tierra uninstrumento demagógico para hacer movilizaciones y perturbar el orden público, pero en ningún caso para producir. Para Lafaurie, es puro cuento que las FARC hablen de campesinos, porque los han desplazado y extorsionado, evidenciando un contrasentido y un problema moral en la sociedad colombiana, que en vez de estar “cuestionando e impugnando” tantos años de terror, termina por excusar y darle una justificación al tema de la tierra como si estuviera en el centro del conflicto en Colombia (El País, 26 Marzo 2013).

Por su parte, el ex presidente Uribe se ha ido lanza en ristre frente a las negociaciones, no sólo por no haberse exigido de antemano un cese de hostilidades sino también porque se le dio cabida a la discusión sobre el desarrollo rural y la participación política de este grupo en el juego democrático (El Universal, 16 de Septiembre 2012). Y es que en su

“

El tema agrario no debe ser tratado con este grupo (FARC), porque las FARC “han sido los verdugos de los ganaderos y de todos los actores productivos del sector rural” (José Félix Lafaurie).

”



Foto: Archivo CINEP/PPP

El discurso de las FARC pro campesinos se contradice con los actos de desplazamiento y extorsión que caracteriza su actuar.

opinión no entiende “por qué hay que definir con un grupo terrorista temas tan importantes de la agenda nacional como el desarrollo rural, la superación del narcotráfico, o las garantías a la oposición”. Y agrega: “nosotros no podemos aceptar lo que ocurrió en algunos países centroamericanos, donde le perdonaron todo a la guerrilla y los llevaron al Parlamento”; situación que en su opinión no tiene paralelo alguno (El Tiempo, 18 de Octubre 2012).

“

Hasta que el grupo de poder, en este caso las élites rurales, no dejen de ser sólo un enemigo agazapado de la paz sino también enemigos de la nación como espacio de igualdad política, del Estado fuerte y de la justicia distributiva (Uribe, 2009) estamos lejos de la consecución de la paz.

”

¿Qué hay detrás de estas declaraciones? La reedición histórica del sesgo anticampesino en desarrollo rural. En las declaraciones de Lafaurie, se apela nuevamente a los argumentos esgrimidos por los detractores de anteriores medidas reformistas (década del 30 y del 60), es decir que las medidas del gobierno son un atentado contra la propiedad privada y el modelo de desarrollo vigente. Sin embargo, así como hay continuidades también se presentan rupturas en el lenguaje, pero con la misma finalidad: la impertinencia de la discusión. Si anteriormente la reforma era comunista o demagógica, hoy la discusión del desarrollo rural y la participación política -asuntos cruciales en la vida nacional- son la legitimización del terrorismo. Asimismo, este discurso se impregna de las nociones de productividad y competencia en las cuales la economía campesina no tiene cabida en la vida económica nacional por su imposibilidad de insertarse en el mercado. Como es el caso de las Zonas de

Reserva Campesina (ZRC), las cuales son vistas con mucho recelo por parte de este sector.

Además, al igual que en años anteriores, las élites rurales siguen reclamando por la “falta” formulación de políticas públicas para el sector, a pesar de que la mayoría de políticas del gobierno central se han, dirigido en las últimas décadas, a fortalecer la agricultura comercial y la ganadería. No sobra citar nuevamente el caso de AIS, la visión sobre el desarrollo rural del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en favor de las grandes plantaciones (Carimagua), y ni qué decir del impulso y consolidación de cultivos comerciales en zonas tradicionales de economía campesina, que fueron transformadas después de la expansión paramilitar (Catatumbo, Meta, Cesar, Córdoba, Montes de María)

De esta manera, el sesgo anticampesino se camufla bajo un discurso que busca negar la existencia de un conflicto armado en Colombia, y las tensiones estructurales que le subyacen (representación política, acceso a la tierra,

etc.), pero que además pretende defender a capa y espada un modelo de desarrollo rural excluyente, el cual no sólo ha absorbido la mayoría de recursos destinados a través de las distintas políticas públicas sino que también se ha negado a rendir los tributos correspondientes al Estado, por la poca claridad de las titulaciones así como la desactualización de los registros catastrales.

En suma, todo este recuento deja entrever que el sesgo anticampesino en Colombia es uno de los factores que compone y configura el actual conflicto armado colombiano, por la negativa de las élites rurales no sólo a llevar una mayor distribución al acceso a la tierra sino también a la actualización de los registros catastrales y hacer parte del contrato fiscal. En este sentido, como afirma Uribe (2011), hasta que el grupo de poder, en este caso las élites rurales, no dejen de ser sólo un enemigo agazapado de la paz sino también enemigos de la nación como espacio de igualdad política, del Estado fuerte y de la justicia distributiva (Uribe, 2009) estamos lejos de la consecución de la paz. ■



La producción campesina al competir con la agricultura comercial está impedida para insertarse en el mercado nacional.

* **Andrés Aponte** Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Violencia, paz y construcción del Estado.

Notas

¹ La tan referenciada metáfora de los tres huevitos: Seguridad, inversión y cohesión social.

² El sesgo anticampesino, según Uribe, se concreta en la acumulación originaria permanente y en la escasez artificial de la tierra como factor productivo (Uribe, 2011).

³ Reyes estima que para la década del ochenta los narcotraficantes hicieron compra de tierras en cerca de 400 municipios.

Referencias

Contexto Ganadero. Las negociaciones con las FARC no van a ningún lado. Publicado el 18 de Enero de 2013, Disponible en: <http://contextoganadero.com/politica/el-proceso-de-paz-no-va-para-ningun-lado-jose-felix-lafaurie>

Duzán, M (2012). "Los ganaderos se sienten mal en este gobierno". En Revista Semana. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/los-ganaderos-sienten-mal-este-gobierno/256400-3>

El Mundo. Déjeme ser escéptico con el proceso de paz: Lafaurie. Publicado el 25 de Enero de 2013. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/proceso_de_paz_jose_felix_lafaurie_respondio_a_senalamientos_de_humberto_de_la_calle/proceso_de_paz_jose_felix_lafaurie_respondio_a_senalamientos_de_humberto_de_la_calle.asp

El País. Presidente de Fedegan no cree en las "buenos propósitos" de las FARC. Publicado el 26 de Marzo de 2013. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presidente-fedegan-cree-buenos-propositos-FARC>

El Universal. El ex presidente Uribe habla de una paz indebidamente negociada. Publicado el 16 de Septiembre de 2012, Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/expresidente-uribe-habla-de-una-paz-indebidamente-negociada-91061>

El Tiempo. Presidente Uribe que con impunidad no habrá un proceso de paz perdurable. Publicado el 18 de Octubre de 2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12314937.html

Gutiérrez, F (2007). ¿Lo que le viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002, Grupo Editorial Norma, Bogotá.

Pécaut, D (1987). Crónicas de dos décadas de política colombiana, Editorial Siglo XXI, Bogotá.

Reyes, A (2007). Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias, en Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, La Carreta Editores, IEPRI, Universidad Nacional, Medellín.

Romero, M(2012). Las tierras despojadas por las FARC: un debate necesario. En Razón Pública disponible en: <http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3331-las-tierras-despojadas-por-las-FARC-un-debate-necesario.html#gsc.tab=0>

Uribe, M (2009). El veto de las élites rurales a la distribución de la tierra en Colombia. En Revista de Economía Institucional, Vol II, N. 21, Segundo Semestre. Págs. 93-106.

(2011). La Nación Vetada: Estado, desarrollo y Guerra Civil en Colombia. Tesis para presentada para obtener el grado de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México, D.F.



Archivo digital de prensa CINEP/ Programa por la Paz

Toda la información que usted necesita sobre
las Ciencias Sociales **en un solo click**

Información de **10 periódicos** de circulación nacional y regional sobre Colombia en temas específicos de las Ciencias Sociales: sociedad, política y gobierno, conflicto armado, paz, narcotráfico, cultura, ecología y medio ambiente.

www.cinep.org.co

